

Santiago, catorce de mayo de dos mil veinticinco.

Al escrito folio N°277: a todo, ocúrrase ante quien corresponda.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre, con fecha tres de agosto de dos mil veinte, dicta sentencia definitiva en la cual, en la parte recurrida, condena a Román Aquiles Barros Mardones, José Albino Krause Alvarez y Luis Hernán Peña Andaur, en calidad de autores del delito de homicidio calificado de don Rubén Eduardo Morales Jara, previsto y sancionado en el artículo 391, numeral 1°, circunstancia primera del Código Penal, cometido en el mes de septiembre de 1973, en la comuna de Temuco, aplicándole a cada uno la pena efectiva de doce años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales. De igual forma, en calidad de cómplices del mismo delito a Jaime Guillermo García Covarrubias y Juan Carlos Figueroa Claus, le impuso, al primero, la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo y, al segundo, un castigo corporal de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, en ambos casos de manera efectiva, más las accesorias legales correspondientes, junto con el pago proporcional de las costas por parte de todos los encausados.

Impugnada dicha decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Temuco, procedió a confirmar el fallo en lo que respecta a las condenas, salvo en lo referente al procesado Jaime Guillermo García Covarrubias, de quien se revoca y, en su lugar, se le absuelve de la acusación formulada.

En contra de esta última sentencia, se dedujeron sendos recursos de casación en el fondo, los que pasan a examinarse y respecto de los cuales se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que, con la finalidad de analizar los recursos planteados, necesario resulta destacar aquellos hechos asentados en la instancia y que son objeto de juzgamiento:

“A) Que en agosto de 1973 el Ministro de Interior de la época, Jaime Tohá, contactó al abogado de Carabineros de la Prefectura de Temuco, Hernán Morales Gómez, para que se hiciera cargo en calidad de Fiscal Militar Ad -hoc de un sumario que se sustanciaría en la investigación que se llevaría a cabo con motivo de la existencia de una supuesta escuela de guerrilla en la localidad de Nehuentúe, sector costero de Carahue. Fue así que una vez notificado legalmente de su designación, se presentó ante el Comandante del Regimiento Tucapel, Cnel. Pablo Iturriaga Marchesse (Fallecido a fs. 731), quien le asignó una dependencia al interior de la Comandancia de la unidad militar y dispuso que el Teniente Jaime Guillermo García Covarrubias, Ayudante del Regimiento, sirviera en calidad de secretario y actuario. En dicho lugar procedió a interrogar a los detenidos que habían sido traídos por patrullas militares del Regimiento Tucapel de Temuco desde Nehuentúe, tras haberse desbaratado la escuela de guerrilla que operaba en dicho lugar.

B) Que Rubén Eduardo Morales Jara, profesor de Matemáticas y militante del MIR, fue detenido por una patrulla militar del Regimiento Tucapel de Temuco el día 4 o 5 de septiembre de 1973 en cumplimiento a una orden emanada de la Fiscalía Militar, que encabezaba el abogado Hernán Morales Gómez, en la causa rol 1.198-73 por infracción a la Ley de Armas. Dicha detención se efectuó en el domicilio de Morales ubicado en calle Pedro Luis Valdivia n.º 120, Población Dreves de Temuco. El detenido fue llevado al Regimiento antes indicado y puesto a disposición de la Fiscalía al día siguiente.



En dicho lugar se le tomó declaración indagatoria y se practicaron diligencias de careos en distintas fechas entre el 6 y 8 de septiembre de 1973, quedando en calidad de detenido e incomunicado en la cárcel pública de esta ciudad durante ese periodo, para finalmente ser declarado reo por el delito antes indicado, según consta de fs. 329 a fs. 339. Durante ese período fue visitado por su esposa y amigos en la Cárcel de Temuco, hasta que el día 11 de septiembre de 1973 le fueron negadas dichas visitas.

C) Que inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y de orden tomaron el control de la ciudad de Temuco. Este cambio en la institucionalidad del país provocó una alteración importante en el trabajo que el abogado Hernán Morales Gómez estaba efectuando en la investigación bajo su competencia, puesto que debido a su cercanía con el régimen saliente las nuevas autoridades comenzaron a desconfiar de él. Por este motivo paulatinamente fue perdiendo injerencia en las decisiones que se tomaban sobre los detenidos y procesados de su causa, remitiéndose solo a firmar las resoluciones que eran confeccionadas en la Fiscalía Militar a cargo del Mayor de Ejército Luis Jofré Soto (Fallecido a fs. 733), que también funcionaba al interior del Regimiento Tucapel.

D) Que para septiembre de 1973 en el Regimiento de Infantería n° 8 "Tucapel" de Temuco existía la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia que estaba a cargo del Capitán Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo (Fallecido a fs. 732), bajo cuya dependencia desarrollaban funciones, además, algunos suboficiales de esa institución, labor que fue reforzada después del 11 de septiembre de 1973 con la agregación de funcionarios de Investigaciones y de Carabineros, los que entregaban información de carácter político al mencionado oficial de todas aquellas personas sujetas a una



investigación por parte de la Fiscalía Militar. De igual modo se sumaron a las tareas de Inteligencia algunos oficiales, clases y conscriptos del Regimiento.

E) Que Rubén Morales Jara fue visto en malas condiciones físicas al interior del Regimiento Tucapel con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 en dependencias donde funcionaban las salas de interrogatorios que la sección de Inteligencia mantenía y en donde eran sometidos a torturas los detenidos. También fue visto en la sala de guardia a la entrada del Regimiento. En una de esas oportunidades en horas de la noche se encontraba en la guardia de la unidad militar el Teniente Jaime Guillermo García Covarrubias, quien además era secretario del Fiscal Militar Ad - hoc a cargo de la causa en la que Rubén Morales Jara estaba procesado. En un momento determinado apareció en ese lugar el Subteniente Manuel Espinoza Ponce (Fallecido a fs. 734), Oficial de la Segunda Compañía de Cazadores, quien habría recibido la orden de ejecutar al detenido Morales Jara. Para esto formó una patrulla integrada por a lo menos cinco soldados clase que tenían el grado de Cabo y Sargento entre los que se contaba al Cabo Ernesto René Oberg Parra (Fallecido), Luis Hernán Peña Andaur, Juan Carlos Figueroa Claus, Román Aquiles Barros Mardones y José Albino Krause Álvarez. El Teniente Jaime García, una vez enterado de la misión encargada a Espinoza Ponce ordenó hacer subir al detenido Morales Jara a un vehículo militar 3/4 en el cual la patrulla se trasladó hacia un puente ubicado sobre el río Quepe. En ese lugar descendieron con Morales Jara a quien pusieron frente a la baranda del puente. Allí el Subteniente Espinoza efectuó dos disparos sobre el detenido con su arma de servicio. Inmediatamente dos soldados clase arrojaron el cuerpo de Morales Jara a las aguas del Quepe, pero al darse cuenta de que aún estaba con vida efectuaron ráfagas de disparos sobre él con sus armas. Después de esto, la patrulla



regresó al Regimiento Tucapel donde el Subteniente Espinoza dio cuenta del cumplimiento de la orden al oficial que le había dado tal instrucción.

F) Que durante la celebración de las fiestas patrias de 1973 se difundió por radio una información que daba cuenta de la fuga del reo Rubén Morales Jara mientras era conducido por una patrulla militar desde el Regimiento Tucapel hasta la cárcel de Temuco. Dicha noticia fue escuchada por el Fiscal Ad - hoc Hernán Morales Gómez mientras pasaba los días feriados en Pucón. Ante la magnitud del hecho, tratándose de un reo de su causa y no habiendo él dado ninguna orden para trasladarlo al tribunal, inmediatamente se apersonó en el Regimiento Tucapel y con fecha 19 de septiembre dictó en la causa una resolución que daba cuenta de la toma de conocimiento del hecho antes indicado, según consta a fs. 340 de autos, llamando a declarar al militar al mando de la patrulla que supuestamente iba a cargo del traslado de Morales Jara. Sin embargo, el Comandante del Regimiento Tucapel, Cnel. Pablo Iturriaga Marchesse (Fallecido a fs.731), le impidió proseguir con la investigación ordenándole que dejara de indagar a ese respecto. El Fiscal Ad - hoc Morales Gómez presentó su renuncia al cargo, la que fue rechazada por Iturriaga, obligándolo a continuar con sus labores; indicándole, además, que estaban en tiempos de guerra y que él decidiría cuando debía dejar el cargo.”

SEGUNDO: Que, lo anterior, atento a lo resuelto en la sentencia de primera instancia, corresponde a un delito de homicidio calificado en la persona de Rubén Eduardo Morales Jara, previsto y sancionados en el artículo 391 N°1, circunstancia 1ª del Código Penal vigente a la época de los hechos, en su carácter de lesa humanidad, cuyos aspectos se mantuvieron en la revisión ejecutada por el Tribunal de Alzada.

TERCERO: Que, por parte del apoderado de los sentenciados Barros y



Krause se dedujo un recurso de casación en el fondo, el cual se basó en las causales de los numerales 1 y 7 del artículo 546 del Código del Procedimiento Penal.

Sobre la causal séptima, la cual analiza en un principio, se vincula con los artículos 456 bis y 488 N°s 1 a 5 del Código Adjetivo, en conexión con el artículo 15 N° 1 del Código Penal, argumentando que existió una errónea aplicación del derecho por parte del sentenciador de segundo grado al determinar la participación de los condenados, indicando que, en caso de ser sancionados, debieron serlos en calidad de cómplices y no como autores del ilícito respectivo. En tal sentido, observa la situación del coincepado Figueroa, a quien se le atribuye una actividad similar, en cambio se le sanciona a título de complicidad, recordando, de acuerdo a la versión del aludido sentenciado Figueroa, fue Manuel Espinoza Ponce quien le propinó dos disparos en la sien a la víctima, de lo cual se sigue que, ninguno de los otros, fue el causante de la muerte de aquél y, en caso de sancionarlos, se debió seguir la suerte del condenado Figueroa Claus, es decir, castigar a todos en calidad de cómplices pues sólo habrían colaborado o cooperado con el hecho típico, ejecutado por el autor conocido.

En este sentido, acusa que el fallo de segunda instancia no se hace cargo de esta alegación, más aún si se considera que los dos disparos en la cabeza son suficientes para producir el acto lesivo, siendo sus acciones irrelevantes, por lo tanto, señala que los sentenciadores han cometido un error de derecho al establecer participación en calidad de autor de los acusados Krause y Barros, al no existir elementos probatorios que lo sustenten, fundamentando su condena en lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, a pesar de no cumplirse los requisitos señalados en



dicha norma para acreditar su participación en el hecho investigado, violándose de esta manera, además, las leyes reguladoras de la prueba.

En tanto, sobre la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, asegura la existencia de diferentes yerros por parte de los sentenciadores de instancia. En primer término, se extiende sobre el error que considera el acoger la agravante contemplada en el numeral 8° del artículo 12 del Código de castigo, entendiendo que no puede ser aplicado pues dicha agravante ya está apreciada para los efectos de configurar el tipo penal por el cual resultaron condenados, lo cual se traduce en una infracción al principio *non bis in idem*. Enseguida, cuestiona la decisión de estimar concurrente la calificante de la alevosía pues, de acuerdo al establecimiento de los hechos, lo cierto es que la víctima ya se encontraba detenida por un proceso militar previo, lo cual es una situación de riesgo preexistente que no puede ser considerada como alevosa. De igual forma, censura el rechazo de la prescripción gradual establecida en el artículo 103 del Código Penal, estimando que se cumplen todos y cada uno de los requisitos de dicha institución, siendo una obligación para los jueces su aplicación, en cambio fue descartada de forma errada y que configura parte de la protesta de casación. Finalmente, discute el rechazo de la minorante contemplada en el numerando 9° del artículo 11 del Código Penal, sobre lo cual, únicamente, asegura que sus mandantes también colaboraron con la investigación.

En consecuencia, solicita que se anule la sentencia recurrida y, en su lugar, se declare la absolución de José Albino Krause Álvarez y Roman Aquiles Barros Mardones o se recalifique su participación en los hechos, sancionándoles como cómplice a una pena no superior a los 5 años de presidio menor en su grado máximo o una pena menor y, conjuntamente, atendida



razones humanitarias debido a la edad y condiciones de salud, se aplique respecto de estos el beneficio de la libertad vigilada u otra medida de cumplimiento alternativo de condena contemplada en la Ley N°18.216

CUARTO: Que, en segundo lugar, recurre de casación en el fondo la defensa del inculpado Luis Peña Andaur, quien también sustenta su arbitrio en las causales de los numerando 1° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, lo cual vincula con los artículos 1, 12 N°8, 15 N°1 y 391 N°1 del Código Penal.

En relación con la causal del artículo 546 N°1 del Código de Procedimiento Penal, precisa que las declaraciones de los condenados están contestes en que el delito fue cometido por el teniente de la época, Manuel Espinoza Ponce, quien dispara en la cabeza de la víctima, no obstante, el hecho de que dicho autor se encuentre fallecido no es una razón suficiente para que los otros encausados asuman una responsabilidad que no les corresponde, más si se considera que eran subalternos, lo cual denota, en concepto del recurrente, un evidente error de derecho que genera una falsa aplicación del artículo 15 N° 1, en relación con el artículo 1, ambos del Código Penal, respecto de la autoría del delito de homicidio calificado de la víctima, entendiendo que no existe una participación válidamente acreditada respecto del acusado Peña Andaur y los otros condenados.

En un mismo sentido, bajo similares argumentos de los otros recurrentes, cuestiona la calificación jurídica atribuida a los hechos, entendiendo que no se dan los supuestos de hecho para configurar la calificante de alevosía, lo mismo que la agravante de responsabilidad criminal contemplada en el numeral 8° del artículo 12 del Código Penal, considerando que la calidad de funcionario público resulta inocua y sin relevancia para su



resultado, ya que esta calidad no era necesaria para el resultado del hecho delictivo en cuestión y el resultado habría sido el mismo si en el hubieran participado civiles y no militares.

Por otra parte, a propósito de la causal del numeral 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, cuestiona la recurrente el valor otorgado a los dichos del coimputado Figueroa, quien presenta múltiples causas por delitos contra la fe pública, tales como, estafa, apropiación indebida, hurto y ejercicio ilegal de la profesión; siendo la única prueba de cargo de la acusación y sentencia en este proceso, no contando con otros elementos de cargo, lo que afecta las leyes reguladoras de la prueba, dando valor de plena prueba a sus declaraciones que se encuentran contrapuestas no sólo con la de los otros inculcados sino que también con otros medios de prueba de la causa y con las leyes de la propia naturaleza, la lógica y los conocimientos científicos afianzados.

En consecuencia, pide invalidar el fallo impugnado y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, en la cual se declare la absolución de Luis Peña Andaur o se recalifique su participación en los hechos como cómplice en los mismos, condenándolo a una pena que no sea superior a los 5 años de presidio menor en su grado máximo o una pena menor, para que, conjuntamente, atendido a su edad de 86 años a la fecha, se aplique respecto de éste, el beneficio de la libertad vigilada u otra medida de cumplimiento alternativo de condena contemplada en la Ley N°18.216

QUINTO: Que, previo al estudio de los recursos reseñados, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal



sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en el estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria y/o alternativa, pues como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro, se coloca al Tribunal en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente



debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso.

SEXTO: Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resaltan los vicios formales de los recursos de fondo descritos.

En efecto, lo cierto es que los recurrentes plantean causales que, en su desarrollo, resultan incongruentes y obstaculizan a una acertada inteligencia pues, al revisar el arbitrio se constata que, por medio del reproche contenido en la causal 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, las recurrentes cuestionan la observancia de las leyes reguladoras de la prueba en la construcción de la participación fijada por el Tribunal, lo cual no es propio del motivo de casación planteado, siendo ello un tópico propio del primero de los numerales del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, el cual describe precisamente como un error en la aplicación de la ley penal: *1° En que la sentencia, aunque califique el delito con arreglo a la ley, imponga al delincuente una pena más o menos grave que la designada en ella, cometiendo error de derecho, ya sea al determinar la participación que ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena* (lo destacado es nuestro).

Conforme a lo anterior, es claro que existe un yerro de la forma en cómo se ha propuesto el capítulo de casación en estudio, lo cual se acentúa aun más cuando la recurrente también deduce el numeral 1°, el que, como se dijo, contiene los posibles vicios en torno a la participación pero que, en este caso, no han sido planteados en la causal propia de ello.

Sobre lo mismo, más allá de la imprecisión descrita, la defensa postula motivos de nulidad que, por el modo en cómo vienen planteados los



argumentos, resultan incompatibles entre sí, puesto que, por un lado, quien propone la primera de las causales de casación en el fondo menciona el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, *per se*, debe aceptar los hechos que la sentencia tiene por acreditados y lo que cuestiona, en realidad, es la imposición de la pena en relación al delito, cometiendo un error de Derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, al proponer un motivo de nulidad como el que describe el numeral séptimo de la mentada disposición, precisamente controvierte la observancia de las leyes reguladoras de la prueba en la construcción de dichos hechos, de tal manera que, como puede advertirse, los motivos no son armónicos sino, más bien, contrapuestos o antagónicos, máxime si la recurrente desatiende esta consideración e incurre en un vicio irreconciliable que obsta a su análisis de fondo, al cual, además, conspira el petitorio enarbolado, el que no resulta acorde con la deficiencia ya descrita.

En este caso, no está de más recordar que, desde el fallo de la SCS 05.1920, G.J. 1920, 1er sem., nro. 60, p. 323, en adelante, la jurisprudencia ha venido sosteniendo que esta causal, la del numeral 1, supone necesariamente la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, puesto que ella resulta de una imposición al reo de una pena distinta de la que le corresponde (Repertorio del Código de Procedimiento Penal, cit., T. III, pp. 342 y s.s.), de tal manera que el recurso, tanto por su planteamiento y por su petitorio, le impiden a esta Corte un pronunciamiento de fondo y lleva a su necesario rechazo, ello en atención a las incongruencias insalvables que se presentan en la



interposición de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, en donde predominan reglas procesales absolutas que no pueden ser soslayadas, ya que lo contrario llevaría a desnaturalizar su fisonomía jurídica y la finalidad perseguida por la ley al incorporarlo a su normativa.

Por otra parte, conforme se observa en las argumentaciones que sostienen la impugnación, lo cierto es que ellas descansan en una suerte de revalorización de los medios probatorios, buscando proponerle a este tribunal de casación, una nueva estimación de los hechos, una revaloración de los insumos probatorios, buscando, en definitiva, una conclusión diversa de aquella asentada en la instancia, lo que, como se viene sosteniendo, está vedado en las condiciones planteadas. En tal sentido, como explica el autor Waldo Ortúzar L., en su obra “Las causales de Recurso de Casación en el Fondo en Materia Penal” (Editorial Jurídica, 10ª Edición, 27 de octubre de 1967, pág. 392 – 393), “... *no se entra a establecer la existencia de los hechos mediante nuevas pruebas, sólo se examina si la prueba rendida autoriza legalmente las declaraciones de hecho de la sentencia*”.

En este plano, siguiendo con los yerros remarcados, es importante reiterar las características de formalidad y de derecho estricto que vienen asociada a esta clase de impugnaciones, lo que también se vincula con una precisión clara de las normas legales que se denuncian como amagadas y, en este caso, v. gr. de lo dicho, el mandante que defiende los intereses de los acusados Krause y Barros, entre ellas menciona los cinco numerales del artículo 488 del Código Adjetivo, no siendo todos ellos leyes reguladoras de la prueba, lo mismo ocurre con el recurso planteado en favor del condenado Peña, quien siquiera precisa normas de tasación, de tal suerte que, para que



las mismas puedan considerarse como violentadas, aparte de mencionarlas correctamente, es necesario que exista un desarrollo concreto y preciso acerca de dichos tópicos, lo cual no se advierte en los escritos que se examinan pues, en este, existe una argumentación basada en una constatación formal – no de fondo – por parte de las defensas, de tal manera que, como se dijo, lo que se pretende es una nueva tasación que es inadecuada en esta sede, debiendo ser descartados los recursos en estudio.

SÉPTIMO: Que, por parte de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, recurre su apoderado, quien formula una causal única de casación, esto es, la contemplada en el numerando 7° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal, esto es, *en haberse violado las leyes reguladoras de la prueba y siempre que esta infracción influya substancialmente en lo dispositivo de la sentencia.*

En este recurso, lo impugnado corresponde a la decisión de segunda instancia, en orden a revocar el fallo en lo que respecta a la condena impuesta al procesado Jaime García Covarrubias, siendo absuelto de los cargos imputados. Al efecto, denuncia la errada aplicación del artículo 488 N° 1° y 2° del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 7°, 14, 16 y 391, todos del Código Penal vigente a la época de los hechos, lo cual construye sobre la idea de que, en el proceso, existen elementos incriminatorios suficientes para determinar que el aludido inculcado tuvo participación criminal en el delito investigado, asegurando que no han sido ponderado las compulsas de la causa rol 1.198-73 del IV Juzgado Militar de Valdivia tramitada por la Fiscalía Militar Letrada de Cautín, el Expediente militar causa rol N° 1.198-73 de la Fiscalía Militar, los recortes de diarios de la época, el informe del Servicio de Registro Civil e Identificación, las declaraciones de



Román Aquiles Barros Mardones, José Albino Krause Álvarez, Hernán Morales Gómez, Luis Raimundo Quezada Chandía, Esmerildo Castro Torres, Rolando Fonseca Venegas, Juan Carlos Figueroa Claus y el careo de este último con el precitado inculpado, aspectos que, en concepto del recurrente, son suficientes para asentar su participación en los hechos investigados de la manera en cómo lo efectuó la judicatura de primera instancia, de allí que considera un error de parte del tribunal de segundo grado al revocar la decisión.

De tal forma, solicita invalidar el fallo recurrido por la causal invocada y, sin nueva vista y acto seguido, dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se declare que se confirma el fallo de primer grado.

OCTAVO: Que, como principal reproche, siguiendo con el carácter riguroso y formal del recurso de casación, cabe mencionar que esta Corte, ya en otras ocasiones (v.gr. Roles ECS. N° 210.276-2023, 11.831-2022, 241.392-2023 y 186.062-2023), ha resuelto la improcedencia de un arbitrio de esta clase cuando sólo se enarbola la causal séptima del artículo 546 del Código Adjetivo, la cual reprime la infracción a la ley reguladora de la prueba.

En tal sentido, se ha resuelto que, si se esgrime aisladamente y no se le vincula con otra de las causales de invalidación que prevé el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, debe ser desestimada. En efecto, si lo que se pretende es que se altere el sustrato fáctico del fallo impugnado, es menester que conjuntamente se enarbole otro de los motivos de nulidad que dicho precepto consagra, por cuanto la sola mutación de los hechos no permite que este tribunal de casación pueda hacer uso de sus facultades invalidatorias determinando, de oficio, cual de aquellas otras causales –taxativamente señaladas en el estatuto procesal del ramo– que denoten una errada aplicación de la ley corresponde hacer concurrente.



NOVENO: Que, a mayor abundamiento, cabe reiterar lo ya dicho a propósito de la alteración factual que, en definitiva, se pretende por parte del recurrente, lo cual es improcedente desde la óptica que se busca una retasación de los medios probatorios, al punto que el sustento de su acción invalidatoria se basa, precisamente, en qué declaró uno u otro testigo pero, en concreto, no detalla de qué manera fueron constreñidas las normas reguladoras de la prueba, de allí que el recurso formulado tampoco podrá prosperar.

Y, de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se **RESUELVE:**

Que, se **RECHAZAN** los recursos de casación en el fondo, interpuestos en favor de los condenados Román Aquiles Barros Mardones, José Albino Krause Alvarez y Luis Hernán Peña Andaur, al igual que el recurso de casación en el fondo, formulado por el apoderado de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, todos ellos deducidos en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciada por una de las salas de la Corte de Apelaciones de Temuco.

Se previene que el Ministro señor Llanos y el Abogado Integrante, señor Gandulfo, concurren a la decisión de rechazar los arbitrios formulados, empero, a propósito del recurso de casación en el fondo presentado por la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, estuvieron por desestimar el mismo, ello en base a las siguientes consideraciones:

1º) Que, conforme se desprende de la lectura del recurso que se detalla en el razonamiento sexto de la decisión de esta Corte, la parte recurrente no



busca una variación de los hechos asentados en la instancia sino que su objetivo no es otro que determinar una participación delictiva, es decir, determinar la responsabilidad penal en los hechos investigados y que el tribunal de fondo de manera invariable ha fijado.

2°) Que, en este sentido, no puede perderse de vista que, como precisa el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, *todo juicio criminal a que dé origen la perpetración de un crimen o simple delito comenzará por la investigación de los hechos que constituyan la infracción y determinen la persona o personas responsables de ella, y las circunstancias que puedan influir en su calificación y penalidad*, de tal forma que la reconstrucción de estos aspectos, entre ellos, la participación, debe estar determinada en base a probanzas legalmente apreciadas.

3°) Que, a raíz de lo anterior, para los disidentes, resulta aceptable recurrir por el ejercicio de valoración que efectúa el tribunal de fondo a propósito de este aspecto – participación – pues, en ello, también deben respetarse las reglas reguladoras de la prueba.

4°) Que, en tal sentido, revisando las motivaciones usadas por los sentenciadores de segundo grado para justificar su decisión absolutoria, se denota que ellos la basan en quien es el principal sustento de imputación respecto de la participación de todos los inculpados, entre ellos García Covarrubias, los dichos del coacusado Figueroa Claus. En este punto, precisan que su inculpación resultó imprecisa cuando se refirió a aquel pues la única acción atribuida y que se vincula con García Covarrubias, corresponde en que él habría apurado el camión en que se habría trasladado al afectado, lo que, concordando con los sentenciadores recurridos, carece de toda relevancia criminal en el lamentable deceso de la víctima, lo cual no afecta ninguna norma



regulatoria de la prueba sino que representa una valoración integral de los dichos de este deponente, quien, en concepto de los sentenciantes, resulta vital en la construcción de la participación de todos los justiciables y no puede pretenderse – como parece ser la intención del recurrente – que su testimonio se divida al punto que sólo sirva para lograr la incriminación y no la absolución.

Por otra parte, las restantes probanzas que repasa el articulista son del todo insuficiente para entender violentada algún precepto regulador de la prueba ya que, al ser revisados, ninguno de ellos resulta conteste sobre la actividad delictual que pesa sobre el encartado García Covarrubias, máxime si, como se viene diciendo, el principal inculpador carece de un sustento incriminatorio, lo que deviene en el rechazo del recurso de invalidación planteado por el acusador institucional.

Igualmente, se previene que el ministro señor Llanos concurre a la precitada decisión haciendo constar que, en anteriores pronunciamientos emitidos en otros procesos – por ejemplo, en las causas Roles ECS. N° 210.276-2023, 11.831-2022, 241.392-2023 y 186.062-2023 –, estuvo por desestimar los recursos en base a los fundamentos entregados en el fundamento séptimo del presente fallo y, por las razones previamente explicitadas, lo ha llevado a revisar y cambiar la posición inicialmente adoptada por quien emite esta justificación.

Redacción a cargo del Ministro, señor Valderrama y las prevenciones, por sus autores.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°8.325-2022.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sras. María



Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H. y el Abogado Integrante Sr.
Eduardo Gandulfo R. Santiago, 14 de mayo de 2025.



En Santiago, a catorce de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

